

MICHOACAN: LOS SINUOSOS CAMINOS DEL PROCESO ELECTORAL

JAIME RIVERA VELÁZQUEZ

La contienda electoral por la gubernatura de Michoacán ha seguido hasta ahora un camino sinuoso, pletórico de altibajos, recodos y señales contradictorias. Su punto de partida fueron las elecciones federales de 1991, cuando se produjo un sorpresivo vuelco a las tendencias observadas en los comicios anteriores: en sólo tres años se transitó de un abrumador triunfo del Frente Democrático Nacional (FDN) en 1988, pasando por un aparente equilibrio de fuerzas entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, a un triunfo del PRI, por amplio margen, en todos y cada uno de los distritos de la entidad.

Con un precedente inmediato como el del 18 de agosto, podría esperarse que el perredismo michoacano, presa del desencanto, marchara al proceso de 1992 con pocas esperanzas y menos energías, y que el PRI manejara la situación cómodamente como el seguro triunfador. Sin embargo, las cosas han sido diferentes.

Signos nuevos en el PRD

Por un lado, el PRD -con un poco de razón y acaso más por su insistencia en mirar todo a través del luminoso cristal de 1988- atribuyó por entero su derrota al fraude electoral, valoró mucho el incremento de su votación absoluta en la entidad respecto de 1989 e inició, tempranamente y con mejor tino político que en los casos anteriores, su nueva campaña electoral.

El primer acierto político del PRD en Michoacán consistió en unificar sus fuerzas, por primera vez desde 1988, en torno de un solo candidato y líder local. Esto fue posible porque, de las sucesivas pruebas de fuerzas que tuvieron lugar desde 1989 entre las dos fracciones perredistas michoacanas, en la mayoría de ellas resultó ganadora la encabezada por Cristóbal Arias Solís. Seguro ya de su supremacía, el joven ex senador emprendió una política de acercamiento personal y conciliación política con sus adversarios, y amplió así los consensos internos en su favor.

Ante un hecho insoslayable, los grupos seguidores de Roberto Robles Garnica se disgregaron como fracción: la mayoría de ellos decidieron, con realismo, sumarse a la inminente candidatura de Cristóbal Arias, en tanto que los menos se enclaustraron en un resentimiento pasivo.

Otro signo nuevo en el perredismo michoacano fue la sustitución del estilo estridente y contestatario que había predominado desde la segunda mitad de 1988, por una línea más propositiva y dispuesta al diálogo con el gobierno. En realidad, esa línea no era del todo nueva en Michoacán: desde las elecciones municipales de 1989, y más aún a raíz de los graves conflictos post electorales que se generaron entonces, algunos dirigentes y diputados locales perredistas buscaron soluciones negociadas, principalmente por medio del diálogo con el gobernador Genovevo Figueroa.

Esa vía estuvo avalada discretamente por Cristóbal Arias, pero sin formar parte de una línea política definida; antes bien, simultáneamente a las negociaciones otros grupos de filiación "cristobalista", amén de los "robustas", se oponían radicalmente a toda conciliación. Lo realmente nuevo de la conducta mesurada y legalista de Cristóbal Arias consiste en que esta vez la inscribe en una estrategia global que el partido ha hecho suya.

La nueva política del PRD en Michoacán se ha expresado, aparte del discurso de campaña de Arias Solís, en hechos menos visibles pero tal vez de mayores consecuencias políticas. En primer lugar, a través de su diputación local el PRD propuso al gobierno y los partidos buscar acuerdos para garantizar unas elecciones limpias en 1992, y en particular para reformar la ley electoral del estado.

Así se inició un proceso de discusión-negociación entre el PRD y el gobierno local (y secundariamente con el PRI y los otros partidos). Obviamente, para que el proceso marchara se requería la voluntad de las partes, y el equipo negociador del PRD desechó la política del "todo o nada", para meterse de lleno en una compleja y más fecunda tarea de elaboración técnico-legislativa y de negociación política; por su parte, el gobierno y el PRI locales hicieron diversas concesiones que no habrían deseado, y en varios momentos fue necesaria la intervención oficiosa de la Secretaría de Gobernación federal para destrabar las discrepancias.

La primera fase de la reforma, referida a la Constitución del estado, no contó con la aprobación del PRD, en virtud de que en ella simplemente se trasladaron los principios de la reforma federal de 1989-1990, incluyendo la llamada "cláusula de gobernabilidad". En cambio, la segunda, consistente en más de cien reformas y adiciones a la ley electoral del estado, fue aprobada, en lo general, por todas las fracciones parlamentarias, aún cuando el PRD y otros partidos de oposición, casi por no dejar, se reservaron el voto particular en contra de unas cuantas disposiciones.

En términos generales, la ley electoral estatal reformada adopta muchas disposiciones del Cofipe (lo

cual, por sí mismo, representa un avance respecto de la ley local anterior, notable por sus incoherencias y ambigüedades), pero en muchos puntos mejora la mecánica electoral para una mejor vigilancia por parte de la oposición. Tal vez el mayor avance consista en la composición relativamente equilibrada de la Comisión Estatal Electoral, y en el requisito de mayoría calificada para adoptar decisiones importantes en ese órgano.

Tales disposiciones no son suficientes para garantizar en todo momento la imparcialidad de la autoridad electoral, pero al menos han impedido la mayoría automática de los agentes oficialistas. El PRD ya ha podido apreciar algunos beneficios de una ley como esa, aunque, al mismo tiempo, se arriesga a que el mismo instrumento legal que él avaló pueda ser utilizado en su contra.

Otra manifestación de la nueva política del PRD en Michoacán ha sido su acercamiento con ciertas franjas sociales que desde fines de 1988 han sido indiferentes u hostiles al movimiento neocar-denista. Con unas líneas de programa moderadas y realistas, así como una hábil actividad diplomática, Cristóbal Arias ha logrado abrir puertas en algunas agrupaciones de empresarios, profesionales, círculos intelectuales y hasta la jerarquía católica. Es probable que, de todos modos, esos grupos no voten por el PRD, pero tal vez ya no miren la posibilidad de un triunfo perredista como una catástrofe, lo cual no sería nada despreciable para ese partido.

Por último, pero no lo menos importante, el candidato perredista ha planteado de hecho una nueva relación con el gobierno de Carlos Salinas, tema escabroso como ningún otro en las filas del sol azteca. Desde el inicio de su campaña, Arias ha evitado las descalificaciones al Presidente de la República, tan socorridas entre sus correligionarios, y ha enfatizado su disposición, en el caso de ser gobernador, a establecer con el gobierno federal una relación institucional de respeto y cooperación. No es remoto que esa actitud del candidato opositor sea, para el gobierno federal, un dato muy significativo a la hora de tomar decisiones sobre la elección de Michoacán.

Es difícil evaluar el impacto en votación que pueda tener la línea política adoptada por Cristóbal Arias, pero por lo menos ha tenido el efecto de proyectarlo ante la opinión pública, tanto local como nacional, como un candidato con posibilidades reales de ganar y de que le reconozcan el triunfo, y como un eventual gobernante con capacidad de manejar una relación constructiva con el gobierno de Salinas de Gortari.

El PRI, en lucha por la credibilidad

En cuanto al PRI, las cosas han marchado con más dificultades de las que sugerían al principio los promisorios resultados del 18 de agosto. Primero porque, al igual que en el conjunto del país, el triunfo del PRI en Michoacán, pese a su contundencia -y tal vez precisamente a causa de ello- no resultó muy convincente. El partido de Salinas de Gortari conquistó una cómoda mayoría en el Congreso, pero no avanzó nada en hacer a las elecciones dignas de crédito. Si bien el PRD en Michoacán no pudo presentar casi ninguna prueba en su alegato de fraude, tampoco el PRI pudo convencer de que su altísima votación se debía a la libre adhesión de la mayoría ciudadana.

Después, la situación política del príismo michoacano se complicó mucho con la nominación de su candidato a gobernador. Por motivos que todavía son objeto de controversia y especulación, la decisión presidencial favoreció a Eduardo Villaseñor, un rico porcicul-tor de muy breve carrera política y apenas conocido fuera de su región, dejando en el camino a otros aspirantes que, si bien presentaban flancos débiles diversos, tenían oficio político y gozaban de cierta ascendencia en las filas de su partido. Tal designación sembró en el príismo michoacano desconcierto, inconformidad y la desalentadora sospecha de que un candidato como ese podría estar destinado, deliberadamente, a perder.

Cualquiera que haya sido la razón de su nombramiento, los primeros pasos de Villaseñor como candidato abonaron la idea de que no era la mejor opción para enfrentar a un PRD en ascenso. Desde sus primeras presentaciones ante la prensa, el abanderado priista dio muestras de su inexperiencia política y de sus muy pobres recursos oratorios; además, en su talante personal no se oculta su baja escolaridad y su rústica formación. En cuanto a su visión de los problemas de Michoacán, es notable su simplismo y hasta su ingenuidad: al decir del rico empresario de La Piedad, el atraso económico que vive el estado se debe a los conflictos electorales de los años recientes; la solución está en dar confianza a los empresarios nacionales y extranjeros para que inviertan en la entidad; él puede hacerlo porque es empresario. En suma -suele repetir con candidez-, él va a cambiar a Michoacán, "de un estado pobre, a un estado rico" (*sic*).

Por otra parte, son conocidas las dificultades que al principio enfrentó el PRI para integrar a sus equipos de campaña, en parte debido a la poca habilidad dirigente del candidato. Inclusive, algunos enviados del centro se retiraron con la queja de que el candidato no se dejaba asesorar.

Todo eso llevó a la dirigencia nacional del PRI a poner una atención especial en Michoacán, y a adoptar medidas extraordinarias para corregir el desatinado rumbo que estaba tomando la campaña. Una de las primeras medidas correctivas consistió en suprimir toda presentación espontánea de Villaseñor ante la prensa, habida cuenta de lo desafortunadas que fueron sus primeras declaraciones. En adelante, gracias a los consabidos "estímulos" a los reporteros, casi todo lo que se publica como "declaraciones" del candidato, son en realidad boletines elaborados por la comisión de prensa del partido. Complementariamente, los reporteros de "la fuente" han sido instruidos para poner de relieve, en cada nota informativa, las cualidades personales del candidato. Así, se puede observar la curiosa uniformidad con que en varios periódicos se

exalta la sencillez, la franqueza y el carácter enérgico de Villaseñor.

Puesta a resguardo la imagen del candidato, los expertos del PRI se han concentrado en armar y poner en marcha la maquinaria electoral, esa que tan magníficos resultados le reportó en los comicios del año pasado. En esa compleja tarea entran en juego lo mismo los candidatos a diputados, diputados en funciones, dirigentes intermedios y activistas seccionales de diversas dependencias gubernamentales y los recursos del Pronasol.

El objetivo primordial de todo ello no es, como suelen denunciar los partidos de oposición, falsificar votos y alterar resultados electorales, sino asegurar que en cada sección acuda a votar por el PRI el número de personas necesarias para ganar la casilla. Y para lograr tal propósito no hay una fórmula única; los responsables de cada sección deben investigar y reportar a sus superiores las circunstancias del lugar para que se actúe en consecuencia.

Así, en cada sitio se combinan en diverso grado la persuasión personal del vecino, la promesa de un candidato, el condicionamiento de un apoyo de Pronasol, la gestión de una obra pública por un diputado, la coacción por parte del líder natural, el regalo de una despensa, una invitación a desayunar, etc.

De esa manera, la votación potencial del PRI rebasa ampliamente a los simpatizantes o ciudadanos que eligen votar por ese partido, para alcanzar a un segmento social sin preferencia política definida y que, por sí mismo, seguramente se abstendría.

Esa enorme maquinaria de control ciudadano, sumada a la hegemonía real que tiene el PRI en el país y que en Michoacán ha ido recuperando en los dos últimos años; aunada también al restablecimiento de la figura presidencial, después de la sacudida de 1988, y a la alta aprobación popular que ha ganado el presidente Salinas de Gortari, probablemente se exprese en una abundante votación para el PRI, capaz de superar incluso a un PRD fortalecido.

Con tal capacidad electoral del gobierno y el partido oficial, pueden perder importancia las limitaciones de su candidato a gobernador. Tal vez resulte cierto lo que hace poco me confió un distinguido priísta, con un orgullo no carente de ironía: "El PRI ya es tan fuerte en Michoacán, que puede ganar hasta con un candidato como Villaseñor".

Como balance, lo imprevisto

De cualquier manera, la elección de Michoacán no puede considerarse predeterminada. El comportamiento electoral de grandes masas siempre ofrece un margen de incertidumbre; guarda un lugar a lo imprevisto que puede volcar las tendencias aparentes.

Es innegable el carácter realmente competitivo de esta contienda, al menos entre el PRD y el PRI. El PRD presenta como candidato a un político joven, experimentado, con carisma, que está actuando con mesura e inteligencia, pero que también posee el ardor y la energía de un líder radical. Lleva en su contra la persistente campaña de desprestigio que ha acosado a su partido y a él mismo, y las deficiencias políticas y logísticas de una agrupación que todavía no acaba de cuajar como partido. Le pesan mucho, además, los violentos conflictos en los que estuvo involucrado el PRD en el pasado reciente, así como el pobre desempeño que han tenido la mayoría de los ayuntamientos y diputados perredistas en la entidad. El caudal de votos estables que tiene el PRD en Michoacán es alto, pero será insuficiente si vuelve a funcionar con eficacia la maquinaria electoral del PRI. Cristóbal Arias podrá ganar sólo si se produce un cambio en el estado de ánimo de la población, análogo "guardando las proporciones" al de 1988.

Al revés del PRD, el PRI concurre a esta contienda con poco candidato y mucho aparato electoral. Si la elección dependiera de una confrontación natural entre candidatos, el partido oficial estaría virtualmente perdido. Pero las posibilidades de triunfo del PRI dependen, esencialmente, de la eficacia de sus mecanismos para hacer votar a sus simpatizantes y a los abstencionistas cautivos, (y eventual mente de su capacidad de adulterar la votación realmente emitida). Otro factor que interviene con relevancia es la aceptación popular de la política del presidente. Como ya ha ocurrido en otros comicios recientes, en cada elección se somete a refrendo la autoridad presidencial; en ello radica a la vez la fuerza y la debilidad del **PRI**.

De los escenarios electorales posibles, hay dos en los que el saldo para el régimen de Salinas sería positivo: el primero, el más deseable para él, es que el PRI gane convincentemente, y que la oposición no pueda generar protestas y conflictos de consideración; el segundo es que el PRD gane, se le reconozca el triunfo y se produzca una alternancia pacífica en el gobierno. Esta segunda eventualidad le reportaría al gobierno de Salinas credibilidad democrática y mayor prestigio en el extranjero. Además, daría un paso decisivo hacia la normalización de relaciones con el PRD, con el comprensible beneficio para ambas partes.

Hay otros dos escenarios imaginables que dejarían al gobierno, a Michoacán y al país un saldo muy negativo, tal vez desastroso: si el PRI gana con malas artes y el resultado no es creído ni aceptado por la sociedad, o bien, si el PRD gana y le escamotean el triunfo en los organismos electorales. En ambos casos, Michoacán se sumiría en un torbellino de conflictos, con altos riesgos de violencia, y la incipiente institucionalidad democrática del país sufriría un nuevo revés. Al final, no importaría mucho en manos de quién quedara la gubernatura, porque habría un seguro perdedor: la democracia en México.

El autor es politólogo y periodista. Investigador de la Universidad Michoacana y miembro del PRD.